

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto Interlocutorio No. 88.

Santiago de Cali, febrero veinticinco (25) de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y restablecimiento del derecho
EXPEDIENTE:	76001-23-33-009-2016 - 00902- 00
DEMANDANTE:	Carlos Mauricio Tascón Ospina
DEMANDADO:	Municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca) y otro
ASUNTO:	Conciliación judicial

AUTO QUE APRUEBA CONCILIACIÓN JUDICIAL

Procede la Sala de Decisión del Sistema Oral a resolver lo que en derecho corresponda, respecto de la aprobación del acuerdo conciliatorio judicial, contenido en acta suscrita el 17 de diciembre de 2019 (folios 255-228) surtido entre el señor Carlos Mauricio Tascón Ospina y el Municipio de Bugalagrande, en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

El demandante ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pidiendo anular la decisión adoptada en la sesión ordinaria del 10 de enero de 2016 por el Concejo Municipal de Bugalagrande, en cuanto aprobó la revocatoria directa de las resoluciones 025 del 19, 030 del 23 y 031 del 29, todas de diciembre de 2015 y como consecuencia de ello se dejaran incólumes los mencionados actos, así como el nombramiento del accionante como personero municipal para el periodo 2016-2020.

1.1. PRETENSIONES.

Fueron expuestas las siguientes (folios 54-56)¹:

“1. Que se declare la nulidad del acto administrativo contentivo de la decisión adoptada en sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2016 por el Concejo Municipal de Bugalagrande (Valle del Cauca), en cuanto aprobó la REVOCATORIA DIRECTA de la Resolución 025 del 19 de noviembre de 2015, de la Resolución 030 del 23 de diciembre de 2015 y de la Resolución 031 del 29 de diciembre de 2015.

2. Y que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho (i) se ordene mantener incólume la legalidad de las resoluciones 025 del 19 de noviembre de 2015, 030 del 23 de diciembre de 2015 y 031 del 29 de diciembre de 2015 (ii) y se deje en firme el nombramiento del doctor Carlos Mauricio Tascón Ospina, como Personero Municipal de Bugalagrande (Valle del Cauca), para el periodo 2016-2020; nombramiento que se llevó a cabo el día 26 de febrero de 2016, mediante la Resolución número 7 de la misma fecha, ello en cumplimiento de la sentencia de tutela dictada el 20 de enero de 2016 por el Juzgado Penal Municipal en función de Control de Garantías de Tuluá

¹ Para mayor precisión se exponen las pretensiones *in extenso*.



– Valle del Cauca; sentencia que fue confirmada en su integridad por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá, mediante la fallo proferido el 24 de febrero de 2016.

3. Que se condene en costas a las entidades demandadas, de conformidad con lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA”

1.2. TRÁMITE SURTIDO.

La demanda llegó al despacho por acta individual de reparto de junio 22 de 2016 (folio 138) y admitida mediante auto interlocutorio No. 04 de enero 17 de 2018 (folio 143).

A través de auto de sustanciación No. 264 de junio 20 de 2019 este ponente señaló el 2 de octubre de 2019 a las 9:30 a.m., para llevar a cabo la audiencia inicial; llegado ese día, celebró la audiencia conforme al artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cumpliendo cada una de las etapas establecidas para ese fin, verificó la presencia de las partes y del Ministerio Público, hizo el saneamiento del proceso y en la etapa de conciliación, acorde con el numeral 8º del artículo 180 del CPACA, instó a los entes demandados pero ellos no mostraron ánimo conciliatorio. Sin embargo, al dictar el auto que declaraba fracasada la conciliación, el Ministerio Público presentó recurso de reposición, a fin de que el despacho insistiera tanto al Concejo como al Municipio de Bugalagrande para que reconsideraran su decisión, siendo acogida tal propuesta por los apoderados de la parte demandada, para lo cual el ponente suspendió la audiencia y fijó nueva fecha para continuarla con el propósito de obtener autorización de los respectivos comités de conciliación, y que presentaran nueva propuesta, lo cual acaeció el 19 de diciembre de 2019 como se observa a folios 225 a 228, adjuntándose también a folios 230 a 258 las actas 461 de 29 de noviembre de 2019, 462 de 30 de noviembre y 463 de 3 de diciembre todas de 2019 en las cuales se trata la revocatoria directa de la decisión adoptada el 10 de enero de 2016 dejando incólumes las resoluciones 025 de 19 de diciembre, 030 de 23 de diciembre y 031 de 29 de diciembre todas del año 2015.

El 30 de enero último continuó la audiencia inicial en su etapa de conciliación conforme al numeral 8 del artículo 180, a la cual asistieron todas las partes, y el Ministerio Público, ratificando su ánimo conciliatorio, pasando a estudio la respectiva acta de conciliación a fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos para su aprobación.

El apoderado del demandado Municipio de Bugalagrande, de conformidad con los parámetros establecidos por el Comité de Conciliación de dicha entidad, presentó su fórmula de acuerdo teniendo en cuenta lo decidido en sesión ordinaria del 3 de diciembre de 2019, que consta en acta No. 463 de ese mismo día, pues en dicha sesión ordinaria se invitó a la apoderada del Municipio para absolver las dudas de los señores concejales con respecto a este proceso, teniendo como resultado la proposición aprobada de revocar el acto administrativo de 10 de enero de 2016, a través de la siguiente manifestación (folio 252):

“(…) 3. PROPOSICIONES

Se da lectura a la proposición emanada por el HC PRESIDENTE. La cual en su contenido dice:

“REVOCAR DE MANERA DIRECTA CON EL CONCENTIMIENTO (sic) PREVIO Y EXPRESO DEL DESTINATARIO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2016”



El HC PRESIDENTE dice que se ha ilustrado suficiente sobre el tema, que se cuenta con el consentimiento previo del Personero Mcpal OSCAR MAURICIO TASCON por lo que es importante ponerlo a consideración, y teniendo presente que es una conciliación, que quedan algunos vacíos, refiere de citación que tendrán que cumplir para el día 30 de enero de 2020 en presentación de las dos partes. Al 15 de diciembre se deben presentar las actas y lo referente a esta proposición."

Igualmente el comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Bugalagrande en el acta de conciliación de 17 de diciembre de 2019 (folios 225 a 228), hizo un recuento tanto de las actuaciones administrativas como del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho aduciendo lo siguiente:

"Que en la diligencia, procede el despacho con el numeral 8 del artículo 180 del CPACA, a instar a las partes a considerar los beneficios de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos y de terminación anticipada de procesos, que tanto el demandante a través de apoderado manifestó su ánimo no conciliatorio, y lo mismo se manifestó por parte de los apoderados del municipio de Bugalagrande y del Concejo Municipal se DECLARO FRACASADA etapa de conciliación.

Que el Ministerio Público, representado por el Doctor NESTOR RICARDO VELEZ GARCIA, interpuso recurso de reposición, manifestando que era viable por las partes reconsiderar el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, por lo cual el Despacho en cabeza de Magistrado Ponente Doctor OSCAR SILVIO NARVAÉZ DAZA procedió a tomar decisión frente al recurso; manifestando que la conciliación si podía ser procedente, en cuanto a Revocatoria Directa del Acto Administrativo, que dejó sin vigencia los actos administrativos sobre el concurso para ocupar la personería Municipal en el periodo 2016-2019, corrió traslado al apoderado del demandante que está de acuerdo con la solicitud del Ministerio Publico y a los demandados municipio de Bugalagrande y el Concejo Municipal cuyos apoderados no estuvieron de acuerdo.

El despacho, acogiendo el recurso interpuesto por el Ministerio Público, decide suspender, la audiencia para solicitar al Concejo Municipal presente la posibilidad de conciliar este asunto, dejando sin vigencia el acto administrativo del 10 de enero de 2016. Por tanto, se revocó el auto 003 que se declaraba fracasada la posibilidad de conciliación y se solicitó al Concejo Municipal para que presentase una fórmula de conciliación en un término de 20 días hábiles.

Al revisar el asunto respectivo y considerando que el motivo de controversia entre el demandante y demandados ha sido superado, los miembros del Comité de Conciliación determinan que el municipio de Bugalagrande si debe CONCILIAR, y en consecuencia, se le da aprobación..."

II. ACUERDO CONCILIATORIO

2.1. CONTENIDO Y TRÁMITE DEL ACUERDO CONCILIATORIO

2.1.1. El 8 de octubre del 2019, se llevó a cabo audiencia inicial en la cual se verificó la presencia de las partes y se efectuó el saneamiento del proceso, el Despacho no avizoró ninguna excepción de oficio, continuó con la fijación del litigio y la posibilidad de conciliación, en ese estado, al declararse fracasada la posibilidad de conciliación por parte del Despacho, el Ministerio Público presentó recurso de reposición a fin de que se reconsidera dicha postura por parte de las entidades demandadas, por lo cual se suspendió la audiencia a fin que se consultara a los comités de conciliación (folios 213-216), presentándose acta de conciliación (folios 225 – 228).



2.1.2. Las entidades demandadas presentaron contestaciones, por parte del Concejo Municipal de Bugalagrande basó su defensa en la falta de requisitos formales, al no presentarse constancia de conciliación y el Municipio de Bugalagrande manifestó que el Concejo Municipal es el responsable política y socialmente del cumplimiento de las obligaciones de su investidura por cuanto una de sus funciones es elegir al personero, en lo que la Administración Central Municipal no tiene injerencia alguna.

2.1.2. Llegado el 30 de enero de 2020, se dio continuación de la audiencia inicial, etapa de posibilidad de conciliación, teniendo en cuenta, que la audiencia inicial celebrada del 8 de octubre de 2019, fue suspendida a fin de que se estudiara propuesta por parte del comité de conciliación del Municipio de Bugalagrande. Allí fue allegada el acta de conciliación de diciembre 17 de 2019 en 4 folios, con las pautas fijadas por el Comité. Acta que obra a folios 225-228, del expediente. En ese estado de la diligencia se concedió el uso de la palabra al apoderado judicial del demandante quien manifestó:

“...su señoría como lo manifesté en la audiencia pasado, la parte demandante no se opone a que haya conciliación, de hecho Carlos Mauricio Tascón fue requerido por el Municipio para que autorizara la revocatoria directa de la actuación administrativa del 10 de enero de 2016, la autorizo entonces no nos oponemos a que haya conciliación al respecto, máxime que no hay pretensión económica alguna en el proceso.” (Intervención en audio y video).

Frente a la aceptación de la propuesta la apoderada del Municipio de Bugalagrande manifestó:

“No tengo objeción sobre la situación.” (Intervención en audio y video).

El Ministerio Público sostuvo lo siguiente:

“... creo que este es uno de los procesos de los cuales se hubiese podido avocar con anterioridad pero no obstante creo que la oportunidad procesal de la conciliación dentro de la audiencia inicial era la más oportuna y para tranquilidad de las partes, en cuanto a la efectividad de la nulidad deprecada pues iba ser muy poca toda vez que el ejercicio del periodo del personero ya está próximo a culminar y como producto de la acción de tutela se le restablecieron esos derechos, lo que quedaba simplemente era la orden del Juez de tutela que se ha cumplido y creo que el acuerdo conciliatorio le es favorable para la entidad pública, en este caso para el Municipio de Bugalagrande y la personería, toda vez que si bien no hay pretensiones económicas para fortuna de ellos, si estaba el componente de las costas procesales y que hoy son de carácter objetivo y podría eventualmente verse afectado el patrimonio público, pero dado que eso también es objeto de señalamiento expreso por parte del apoderado del actor, consideramos que están dadas las condiciones para que se acepte este acuerdo conciliatorio, toda vez que no afecta la legalidad, no afecta el patrimonio público y adicionalmente, permite en parte muy pequeña pero permite descongestionar la actividad judicial, muchas gracias señor magistrado y estamos conforme con el acuerdo conciliatorio” (Intervención audio y video).

El Despacho intervino:

“...así pues, dado los presupuestos previstos en los artículos 70 y subsiguientes, así como el 104 de la Ley 447 de 1998 que componen igualmente el estatuto de la conciliación y que este ponente convocara entonces a la Sala de decisión para que el acuerdo así logrado consistente en que frente a la revocatoria directa del acto impugnado en los términos del parágrafo del artículo 95 del CPACA las partes concilian sus diferencias y consienten en solicitar la terminación del proceso...” (Audio y video).



El magistrado hizo alusión a los presupuestos para la procedencia de la aprobación de los acuerdos conciliatorios en materia contencioso administrativo y convoca a la sala para el estudio de la misma (folios 264-265, CD con audio y video folio 266).

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES:

La Ley 446 de julio 7 de 1998, en su Parte Tercera consagra los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre ellos, contempla en el Título Primero de aquella parte, la conciliación, la cual define en el artículo 64 como,

“...un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador...”.

Señala a continuación en sus artículos 65 y 66 que son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley y que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada, en donde el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.

Las normas legales también establecen los presupuestos mínimos que deben concurrir para que proceda la aprobación judicial de los acuerdos conciliatorios, así lo disponen los capítulos 2° y 3° de la Parte III de la mencionada Ley 446 de 1998.

No obstante, ha habido abundante desarrollo jurisprudencial en estos aspectos, especialmente cuando de los supuestos para la procedencia de la aprobación de los acuerdos conciliatorios en materia contencioso-administrativa se trata²:

“...1. De manera reiterada esta Corporación ha señalado que el acuerdo conciliatorio prejudicial se somete a los siguientes supuestos de aprobación³:

- a. La debida representación de las personas que concilian.*
- b. La capacidad o facultad que tengan los representantes o conciliadores para conciliar.*
- c. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.*
- d. Que no haya operado la caducidad de la acción.*
- e. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación.*
- f. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público (artículos 73 y 81 de la Ley 446 de 1998)...”*

Pronunciamiento reiterado en varias oportunidades por la Corporación⁴ y revalidado con muy pocos ajustes, en jurisprudencia más reciente⁵:

“...El artículo 73 de la Ley 446 de 1998, establece que la autoridad judicial “(...) improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público” y el parágrafo segundo del artículo 81 de la misma ley –modificadorio del artículo 61 de la Ley 23 de 1991- dispone que “No habrá lugar a conciliación cuando la acción correspondiente haya caducado”.

² C. de Estado, expediente 2003-0091-01 (25347). Sentencia de enero 29 de 2004. C. P. Alíer Eduardo Hernández.

³ Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003.

⁴ C. de E. Sección Tercera. Expediente 2000-2627-02(26877). Sentencia de septiembre 30 de 2004. CP. Alíer Eduardo Hernández.

⁵ C. de E. Sección Tercera, subsección “B”. Auto del 20 de febrero de 2014, expediente 42612 Radicación 25000 23 26 0002010 00134 01. C. P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.



9. De acuerdo con lo anterior, los principales criterios que deben ser analizados para efectos de determinar la procedencia de la aprobación del acuerdo conciliatorio al que hayan llegado las entidades estatales, dentro o fuera de un proceso judicial, son:

- Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.*
- Que las entidades estén debidamente representadas.*
- Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto del convenio.*
- Que no haya operado la caducidad de la acción.*
- Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.*
- Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrimado a la actuación.*
- La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada (art. 81, L. 446/98, art.63, Dec.1818/98)..."*

Sin embargo, también ha sido del sentir de la jurisprudencia nacional en lo contencioso administrativo que obre en el asunto, prueba suficiente que permita estimar una alta probabilidad de condena y que el acuerdo resulte provechoso para la administración⁶:

"...En todo caso, resulta imposible en este trámite conciliatorio determinar si fue inadecuada la sanción impuesta al contratista por carecer de elementos probatorios que así lo demuestren y el juez para aprobar este arreglo debe contar con elementos de juicio suficientes de modo que existan altas probabilidades de condena en contra de la administración y que la aprobación del acuerdo conciliatorio resultaría provechosa para los intereses de las partes en conflicto.

La Sala ha reiterado esta orientación en otras decisiones, en providencia de 30 de mayo del 2002 dijo:

"Es procedente en este momento, hacer una reflexión sobre lo afirmado por el apoderado de la parte actora en su escrito de sustentación del recurso, (fl. 1022 cdno. ppal.), cuando sostiene que para efectos de la conciliación no se exige la plena e inequívoca demostración de los hechos controvertidos o de la valoración económica de los mismos, pues un pedimento de tal naturaleza iría en contrasentido de la conciliación como tal, ya que el propósito de este mecanismo es la solución alterna de conflictos y procurar por esta vía la mejor prestación del servicio de justicia.

La Sala estima que no es acertada la posición del recurrente en este sentido, ya que según lo ha dicho la Sala, la conciliación en materia contencioso administrativa y su posterior aprobación, por estar en juego el patrimonio estatal y el interés público, una y otra deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de conflicto, de manera que no quede duda al juez de conocimiento que existen altas probabilidades de condena en contra de la administración y que la aprobación del acuerdo conciliatorio resultaría provechosa para los intereses de las partes en conflicto.

No es que la Sala desconozca la importancia y utilidad de la conciliación no solo como mecanismo de descongestión de los despachos judiciales sino también para procurar la efectividad de los derechos de las partes. Sin embargo, tales circunstancias no pueden servir de excusa para omitir la exigencia de certeza del derecho reclamado, como ya se precisó."⁷...

La Sala se propone entonces, resolver sobre la aprobación o improbación del acuerdo a que han llegado las partes con el aval del Ministerio Público.

⁶ C. de Estado, expediente 2002-0564-01 (24225). Sentencia de noviembre 4 de 2004. C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

⁷ Esta posición se reiteró en providencia de 22 de mayo del 2003. Expediente 23530.



3.2. EL CASO CONCRETO

Corresponde a la Sala determinar si los presupuestos procesales y materiales para la aprobación del acuerdo conciliatorio celebrado entre los apoderados del demandante Carlos Mauricio Tascón y del Municipio de Bugalagrande - Concejo Municipal, se cumplen. En ese cometido, debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

3.2.1. Respecto a la representación de las partes y la capacidad de sus representantes para conciliar.

En cuanto a este requisito, el demandado Municipio de Bugalagrande, fue representado por la abogada Alexandra Zúñiga González, a quien le fue conferido poder por el alcalde Municipal Jorge Eliecer Rojas, de conformidad con el mandato escrito que obra a folio 167 con sus respectivos anexos, con la facultad expresa de conciliar, no obstante en la continuación de la audiencia inicial del 30 de enero de 2020 se hizo presente la abogada María del Mar Hurtado Castillo con poder otorgado por el actual alcalde del Municipio de Bugalagrande Julio Cesar Rojas Trujillo, con el mandato escrito que obra a folio 259 con sus respectivos anexos, igualmente con la facultad de conciliar.

Por parte del Concejo Municipal de Bugalagrande fue representado por el abogado Néstor Ricardo Vélez García, presentando poder visto a folio 166, otorgado por el Presidente del Concejo Municipal, John Harold González Esquivel. El señor Carlos Mauricio Tascón, está representado por el abogado Francisco Javier Guerra Jaramillo, quien también goza de la facultad de conciliar (folio 20 y 21). Por consiguiente, la Sala encuentra satisfecho este primer presupuesto para aprobar el acuerdo conciliatorio.

3.2.2. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.

En la demanda no existe pretensión económica alguna, ya que el demandante pedía la nulidad de acto administrativo producido en sesión ordinaria de enero 10 de 2016, por el Concejo Municipal de Bugalagrande, el cual revocó las resoluciones 025 de 19 de diciembre, que abrió la convocatoria para el concurso de méritos al cargo de personero municipal, la 030 de 23 de diciembre, la cual conformó la lista de elegibles a personero municipal y la 031 de 29 de diciembre todas de 2015, la cual conformaba lista definitiva de elegibles. Como consecuencia de la nulidad del mencionado acto administrativo de enero 10, el accionante a título de restablecimiento pide que se mantengan incólumes los actos administrativos que dieron trámite al concurso de méritos (resoluciones 025, 030 y 031), y se deje en firme su nombramiento como personero municipal, el cual se llevó a cabo el 26 de febrero de 2016, pero en cumplimiento de sentencia de tutela, la cual fue condicionada a que se demandaran los actos supuestamente irregulares en que pudo incurrir el Concejo Municipal, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de dicha sentencia (CD folio 24) .

3.2.3. Que no haya operado la caducidad del medio de control.

Teniendo en cuenta que mediante acción de tutela se dictó sentencia que ordenó acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar el acto administrativo dictado en sesión ordinaria de enero 10 de 2016, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del fallo respectivo, fallo de segunda instancia del 24 de febrero de 2016 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá (aportado en formato CD folio 24), y que fue notificado al accionante el 25 de febrero de 2016 (folios 22 y 223) por lo cual el



término de caducidad que trata el artículo 164 literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fenecía el 26 de junio de 2016, siendo presentada la demanda en forma oportuna el día 22 de junio de 2016, como se observa en el acta individual de reparto (folio 138). Así pues de acuerdo con lo anterior se tiene que la presente demanda fue presentada en término.

3.2.4. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación.

Como ya se dijo, en este proceso la conciliación no es de carácter patrimonial, dado que al revocarse el acto administrativo que a su vez revocaba las resoluciones 025 de 19 de diciembre, 030 de 23 de diciembre, y 031 de 29 de diciembre todas del año 2015, quedó incólume el nombramiento como personero del demandante durante el periodo 2016-2020, el cual de todos modos había sido ordenado mediante fallo de tutela.

3.2.5. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público.

Con el acuerdo anteriormente descrito, quedan conciliados los efectos derivados del acto administrativo que fundamenta la conciliación, acuerdo que no lesiona el patrimonio público, es decir, lo convenido no es violatorio de la ley, ni lesiona el patrimonio de la entidad pública, por encontrarse dentro de los parámetros legales, pues evita los costos del proceso.

Finalmente la propuesta fue aceptada por la parte demandante, acuerdo que a criterio de la Sala y del Ministerio Público no resulta nocivo para el patrimonio público ni para los derechos mínimos del accionante, por encontrarse enmarcado dentro del rango de las facultades de ley.

3.3. EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN

3.3.1. Frente al acto administrativo impugnado.

Ahora bien, respecto al procedimiento para proferir el auto que aprueba la conciliación judicial es pertinente citar lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 23 de 1991, modificado por el 72 de la Ley 446 de 1998, que a la letra estableció:

"Artículo 71. Revocatoria directa. *El artículo 62 de la Ley 23 de 1991, quedará así:*

"Artículo 62. *Cuando medie Acto Administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado."*
(Subraya la Sala)

Luego, si bien es claro que con la ejecutoria del auto que aprueba el acuerdo conciliatorio se entiende revocado el acto administrativo acusado por la parte actora, no obstante, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a la revocatoria directa en su artículo 95 dispuso lo siguiente:

Artículo 95. Oportunidad. *La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.*



Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.

Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. (Subraya la Sala)

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria."

Así pues, de acuerdo al artículo y parágrafo del anterior el H. Consejo de Estado, en sentencia del 15 de agosto de 2013 manifestó lo siguiente⁸:

"En lo que toca con la oportunidad para solicitar la revocatoria de los actos administrativos, el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011 introduce una serie de importantes modificaciones entre las que se observan, en primer lugar, la posibilidad con que cuenta el administrado de solicitar la revocatoria de un acto administrativo aún en el evento de haber acudido ante esta jurisdicción, siempre que no se le hubiera notificado el auto admisorio de la demanda, caso en el cual la autoridad pierde competencia para su revocación directa.

*Lo anterior difiere de la regla prevista en el artículo 71 del Decreto 01 de 1984, en cuanto establecía que se podía solicitar la revocatoria de un acto administrativo incluso si el interesado había acudido al control judicial, "siempre que en este último caso no se hubiera dictado auto admisorio de la demanda"*⁹.

Así mismo, el artículo 95 ibídem reduce el término con que cuenta la administración para resolver la solicitud de revocatoria, a dos meses, respecto del previsto en el artículo 71 del Decreto 01 de 1984, en todo caso contados a partir del momento en que se radica la respectiva solicitud de revocatoria directa.

En cuanto al parágrafo del citado artículo 95, debe decirse que éste introduce la figura de "la oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados" según la cual, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público las autoridades demandadas podrán formular una oferta tendiente a revocar los actos administrativos, impugnados en sede judicial la que, previa revisión del juez Contencioso Administrativo, será puesta en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta, evento en el cual el proceso se dará por terminado." (Subraya la Sala).

⁸ Sección Segunda, Subsección B MP Gerardo Arenas Monsalve, Radicación: 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07).

⁹ La Sala no pasa por alto que ya por vía jurisprudencial, esta Corporación había sostenido que una interpretación del artículo 71 del Decreto 01 de 1984, bajo los postulados del derecho fundamental al debido proceso permitía considerar que: "...El dispositivo jurídico allí contenido [artículo 71 del Decreto 01 de 1984] relativo al límite de la competencia de la Administración para revocar sus actos administrativos, no se hace efectivo con la simple expedición del auto admisorio de la demanda sino con la notificación de dicha providencia a la Administración a fin de que está sea debida y oportunamente enterada del momento a partir del cual cesa su facultad de revocatoria.". Fallo de diciembre 3 de 2009. Rad. 0436-2008. MP. Gustavo Gómez Aranguren.



Luego si bien, es claro que la propuesta del comité de conciliación del Municipio de Bugalagrande dentro del proceso es revocar el acto administrativo objeto de reproche, siendo aceptada esta como se observa a folio 255 por el accionante, así como por su apoderado en la continuación de audiencia inicial, por lo tanto, no es necesario declarar la nulidad de este pues conforme a la ley, sus efectos jurídicos ya cesaron con dicha revocatoria.

3.3.2. La potestad de la administración de revocar de forma directa los actos administrativos. Alcance.

A la administración pública se le ha reconocido la potestad de excluir del ordenamiento un acto administrativo con la finalidad de proteger derechos subjetivos cuando causa un agravio; de manera que es una oportunidad tendiente a corregir lo actuado por consideraciones relativas al interés particular del recurrente, acompañado de un interés general, el cual es velar por la legalidad.

La revocación directa es una prerrogativa de la administración para enmendar actuaciones contrarias a la ley o la Constitución, que se caracteriza por ser extraordinaria al estar de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas, y para ser ejercida debe verificar que se dan los requisitos legales de forma tal que se protejan los derechos de quienes resultaron favorecidos a partir de su vigencia y en respeto al principio de seguridad jurídica.

La ley prevé para la revocatoria del acto varias causales que pueden esgrimirse de oficio por la entidad que lo expidió o a petición de la parte interesada, la administración lo puede hacer en cualquier momento, aun cuando el acto haya sido demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), sobre la prerrogativa de revocación directa trajo las mismas causales de procedencia de la regulación anterior. Respecto a la oportunidad de la administración para el ejercicio de la prerrogativa, indica que podrá ejercerse incluso cuando se haya demandado el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo que se haya notificado el auto admisorio de la demanda.

Por su parte, el párrafo del artículo 95, introduce un cambio importante en materia de procedimiento administrativo, al permitirles a las autoridades públicas demandadas formular oferta de revocatoria de los actos administrativos cuya legalidad empezó a discutirse en sede judicial.

La oferta de revocatoria directa constituye para el derecho administrativo colombiano una figura novedosa e interesante, se traduce en la posibilidad de terminar el proceso a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, cuya oportunidad para formularse va hasta antes que se profiera sentencia de segunda instancia.

La entidad para ofertar la revocatoria de sus actos administrativos debe contar con aprobación previa del Comité de Conciliación, e indicará en la fórmula los actos y las decisiones objeto de la revocatoria, los cuales deben coincidir con los acusados en sede judicial, y adicional a ello, determinar la manera en que se restablecerá el derecho conculcado o se repararán los perjuicios causados con los actos demandados.



La fórmula de oferta de revocatoria directa debe comprender (i) qué es lo que se propone, (ii) cuáles las condiciones concretas de la propuesta y (iii) a qué queda obligada la entidad e incluso el administrado si es del caso; seguidamente el juez revisará si la oferta se encuentra ajustada en todo al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en conocimiento del demandante para que manifieste si la acepta, en caso positivo, dará por terminado el proceso mediante auto que prestará mérito ejecutivo en cuanto a las obligaciones allí consignadas y especificadas que la autoridad debe cumplir a partir de su ejecutoria y señalará las que estén a cargo del demandante.

2.3.3. Frente al proceso iniciado u otros procesos.

La conciliación cuando es total, es decir, respecto de todas las pretensiones de la demanda, una vez aprobada, termina el proceso y hace tránsito a cosa juzgada. El original del acta correspondiente prestaría mérito ejecutivo si fuera el caso. Efectos estos consagrados en la Ley 446 de 1998, así:

“Artículo 66. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.

(...)

Artículo 105. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al proceso, permitirá que aquella repita total o parcialmente contra éste.

La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial, el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará entre la entidad pública y aquél. (Subraya la Sala)

3.4. CONCLUSIÓN.

Examinado el expediente y la prueba recaudada, así como el ordenamiento jurídico aplicable al caso, pues la conciliación judicial es un medio alternativo de solución de conflictos que permite dar fin a un proceso contencioso administrativo ya iniciado, cuando el acuerdo logrado no es lesivo al patrimonio estatal, no contraviene el ordenamiento jurídico y tiene el soporte probatorio suficiente, la Sala de Decisión estima que el acuerdo reúne los presupuestos de ley y es posible impartirle aprobación.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO. APROBAR el acuerdo conciliatorio que consta en el acta de diciembre 17 de 2019 y transcrito en esta providencia, celebrado dentro del proceso que se adelantó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el señor Carlos Mauricio Tascón contra el Municipio de Bugalagrande y el Concejo Municipal de Bugalagrande, en el cual se revocó directamente la decisión adoptada en sesión ordinaria celebrada el **10 de enero de 2016** por el Concejo Municipal de Bugalagrande (Valle del Cauca).



El acuerdo conciliatorio es total, es decir, finiquita la totalidad de las pretensiones de la demanda, a través de la fórmula conciliatoria planteada por los entes demandados y aceptada por la parte demandante.

SEGUNDO. Para el cumplimiento de lo acordado y lo dispuesto en esta providencia, por Secretaría se expedirán las copias respectivas con constancia de su ejecutoria, y precisando cuál de ellas resulta idónea para el cumplimiento de la obligación (artículo 114 del Código de General del Proceso) y 110 del Decreto 1818 de 1.998.

TERCERO. DECLÁRASE terminado el proceso.

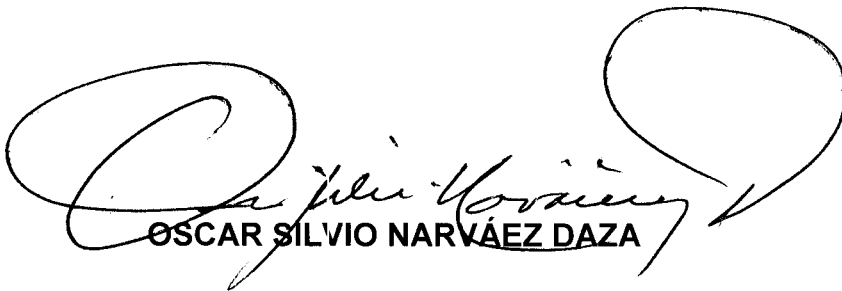
CUARTO. En firme esta providencia, la Secretaría procederá al archivo del expediente y expedirá las copias de las demás piezas procesales que las partes soliciten para los fines pertinentes, previa anotación en el libro radicator.

Se discutió y aprobó en sesión de Sala de la misma fecha.

NOTIFÍQUESE

Discutida y aprobada en la fecha. Acta No. _____

Los magistrados,



OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS



OMAR EDGAR BORJA SOTO